

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDEN de 18 de mayo de 1962 por la que se clasifica como de Beneficencia particular la «Asociación Española de Ayuda a los Emigrados Hispanoamericanos de España».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de clasificación de la «Asociación Española de Ayuda a los Emigrados Hispanoamericanos en España», establecida en Madrid, y

Resultando que aparece constituida en Madrid una persona jurídica denominada «Asociación Española de Ayuda a los Emigrados Hispanoamericanos en España», cuya constitución y funcionamiento, de acuerdo con la Ley de Asociaciones, fué aprobada por Orden de este Ministerio del 16 de noviembre de 1931 quedando finalmente constituida el día 21 del propio mes e inscrita en el Registro correspondiente con el número 9.646.

Resultando que los fines de esta Asociación—según los Estatutos y demás antecedentes que obran en el expediente—son exclusivamente de carácter benéfico-social, carentes de todo matiz político, y se concretan en la protección y ayuda moral y económica a todos los emigrantes de Hispanoamérica que residen en España, habitual o transitoriamente y que lo necesiten, debiendo ser previamente calificados como emigrados por los órganos rectores de la Asociación, y pudiendo entonces recibir la protección de ésta.

Resultando que los medios con que cuenta la institución consisten en las cuotas de los asociados que la integran, en los beneficios que se obtengan en actos culturales, revistas, tómbolas, rifas, espectáculos o colectas que se autoricen y en cualquiera otra clase de bienes que reciba o adquiera por título lucrativo u oneroso.

Resultando que la dirección de la misma está encomendada a una Junta Ejecutiva, asesorada por la Comisión Consultiva, con las funciones que su denominación indica, estando prevista en los Estatutos su composición, la renovación de sus miembros y la gratuidad de todos los cargos directivos, e igualmente que los asociados, cuando se vean en la necesidad de acogerse a la protección de la Asociación y mientras esta necesidad material perdure, no tendrán voz ni voto en las Asambleas ni podrán ostentar cargos directivos (según acuerdo de las Juntas Ejecutiva y Consultiva del día 9 de mayo de 1932, dando nueva redacción a los artículos 6.º y 10 de los Estatutos, que consta en certificación firmada por los señores Presidente y Secretario de la Asociación en la misma fecha, que queda unida a este expediente).

Resultando que instruido el expediente de clasificación, a solicitud del Presidente de la Asociación, quedan unidos al mismo los Estatutos iniciales y su modificación, por acuerdo del 9 de mayo del corriente, las certificaciones y el «Boletín Oficial del Estado» con los edictos reglamentarios, y el informe de la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid que propone la clasificación de esta Asociación como de Beneficencia particular.

Vistos el Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1839. Considerando que la institución de que se trata tiene por objeto la ayuda moral y material a los emigrados hispanoamericanos con carácter gratuito y sin discriminaciones, encontrándose debidamente regulado el funcionamiento de la Asociación con aprobación gubernamental; por lo cual es visto que reúne las condiciones precisas para ser clasificada como Asociación de Beneficencia particular al amparo del artículo 2.º del Real Decreto y 3.º de la Instrucción del ramo, ambos de 14 de marzo de 1839.

Considerando que por tratarse de una Asociación benéfica creada y reglamentada por la libre voluntad de sus miembros y sostenida exclusivamente con bienes y fondos particulares de libre disposición, sólo corresponde al Protectorado la misión de velar por la higiene y por la moral públicas, según establece el antes citado artículo 3.º de la Instrucción, sin perjuicio de las facultades que a la Autoridad gubernativa competen acerca de las Asociaciones.

Este Ministerio ha acordado:

Primero. Clasificar como benéfico particular la «Asociación Española de Ayuda a los Emigrados Hispanoamericanos en España», correspondiendo tan sólo al Protectorado velar

por la higiene y moral públicas, y dejando a salvo las facultades gubernativas cerca de las Asociaciones.

Segundo. Trasladar esta Resolución al Ministerio de Hacienda a los efectos oportunos.

Lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de mayo de 1962.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Beneficencia y Obras Sociales.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 21 de mayo de 1962 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el pleito contencioso-administrativo número 6.286.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica para general conocimiento y cumplimiento de sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el pleito contencioso-administrativo número 6.286, promovido por «Aguas y Saltos del Zadorra, S. A.», contra Ordenes del Ministerio de Obras Públicas de fecha 10 de agosto de 1960 y 8 de marzo de 1961, sobre autorización transferencia de derechos de concesión, peticiones y proyecto de unificación de saltos, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos que rechazando la alegación de inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado desestimamos el recurso interpuesto por la representación de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» contra Ordenes ministeriales de Obras Públicas dictadas en 10 de agosto de 1960 y 8 de marzo de 1961, la primera relativa a autorización de transferencia de derechos de concesión de aguas, peticiones y proyecto de unificación de saltos y la segunda denegatoria de su reposición, por ser ambas conformes a Derecho, y, en su virtud, las confirmamos declarándolas firmes y subsistentes, absolviendo de la demanda a la Administración General del Estado, y sin que hagamos expresa imposición de costas.»

Madrid, 21 de mayo de 1962.—P. D., Joaquín de Aguilera.

ORDEN de 21 de mayo de 1962 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el pleito contencioso-administrativo número 5.907

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el pleito contencioso-administrativo número 5.907, promovido por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (E. N. H. E. R.) contra Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 18 de noviembre de 1960, dictada por delegación ministerial, sobre inscripción de un aprovechamiento de aguas públicas adquirido por prescripción a favor de «Azucarera Leopoldo, S. A.» y contra la de 13 de abril de 1961, denegatoria de su reposición, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos que desestimamos en sus pedimentos de nulidad de actuaciones y de fondo el recurso interpuesto por la representación de «Aguas y Saltos del Zadorra, S. A.», contra Ordenes ministeriales de Obras Públicas de 18 de noviembre de 1960 y 13 de abril de 1961, dictado, por delegación, por la Dirección General de Obras Hidráulicas, la primera relativa a la inscripción de un aprovechamiento de aguas públicas adquirido por prescripciones a favor de «Azucarera Leopoldo, S. A.» y la segunda denegatoria de su reposición, por ser ambas conformes a Derecho, y, en su virtud, las confirmamos, declarándolas firmes y subsistentes, absolviendo de la demanda a la Administración General del Estado, y sin que hagamos especial imposición de costas.»

Madrid, 21 de mayo de 1962.—P. D., Joaquín de Aguilera.